



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

PROCESO	Verbal (Responsabilidad civil extracontractual)
DEMANDANTE	Isabel Sorella Fernández Orrego
DEMANDADO	La Equidad Seguros S.A. y otros.
PROCEDENCIA	Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-013–2022-00043-01
RADICADO INTERNO	093-22
PROVIDENCIA	060-23
DECISIÓN	Si el proceso no puede ser impulsado por el Juzgado, por encontrarse pendiente de una actuación de la parte demandante, el operador jurídico deberá requerir a ésta para que, en el término treinta (30) días, proceda a su cumplimiento. Si dicha parte deja vencer el referido plazo, sin haber adelantado ninguna gestión para el surtimiento del trámite pendiente, será procedente disponer la terminación del proceso por desistimiento tácito. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del cinco de septiembre de 2022, mediante el cual se declaró terminado por desistimiento tácito el presente proceso verbal instaurado por Isabel Sorella Fernández Orrego en contra de David y Daniela Arboleda Naranjo y La Equidad Seguros O.C.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. La señora Isabel Sorella Fernández Orrego demandó en proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual a La Equidad Seguros, David y Daniela Arboleda Naranjo, pretendiendo la indemnización de los perjuicios que le fueron ocasionados por la muerte de su hijo Jefry David Hernández Fernández, en un accidente de tránsito ocurrido el nueve de febrero de 2020, en la vía Hatillo-Bello, kilómetro 22+400 ruta 2510, siendo aproximadamente las 10:50

horas.

2.- Oposición y trámite. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, el cual, mediante auto del 25 de marzo de 2022, después de haberse subsanados unos requisitos exigidos, admitió la demanda, disponiendo la notificación de la parte demandada en los términos establecidos en el artículo 291 del C. General del Proceso.

Con el fin de integrar el contradictorio, el Juzgado de primer grado, en providencia del 19 de julio de 2022, la cual fue notificada por estados el 21 del mismo mes y año, requirió a la parte demandante para que en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esa providencia, procediera a *“realizar la notificación personal a la parte demandada en los términos de ley, so pena de disponer la terminación del proceso bajo los presupuestos del artículo 317 del Código General del Proceso”*. (PDF.09Requiere317 2022-00043).

3.- El auto apelado. Vencido el término concedido a la demandante para practicar la notificación a la parte demandada, esto es, sin que se cumpliera con la mencionada actuación, por proveído del cinco de septiembre de 2022, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín declaró la terminación del proceso por desistimiento tácito, sin imponer condena en costas, además, ordenó el archivo del expediente.

4.- La apelación. Oportunamente el apoderado de la parte actora interpuso los recursos de reposición, y en subsidio, de apelación, argumentando en términos generales que, los autos del 19 de julio de 2022, que fueron notificados los días 21 y 22 de julio de la misma anualidad, no contienen ningún requerimiento a la parte demandante, pues solamente se refieren al decreto de desistimiento tácito de las medidas cautelares solicitadas.

Señaló que en los citados autos no había una carga procesal que debía cumplir la parte demandante, so pena de dar por terminado el proceso en aplicación del artículo 317 del Código General del Proceso.

5.- Decisión de la reposición. En proveído del 25 de octubre de 2022, el Juzgado de primera instancia mantuvo incólume la decisión cuestionada, aduciendo que el 19 de julio de 2022, se emitieron dos providencias, una en el cuaderno de

medidas cautelares, teniendo por desistidas las cautelas peticionadas, y otra, en el cuaderno principal, requiriendo de manera expresa a la parte actora para que notificara a la parte demandada, pronunciando este que pasó por alto la demandante. En consecuencia, concedió la alzada propuesta de manera subsidiaria.

CONSIDERACIONES

1.- Del Desistimiento tácito. La terminación por desistimiento tácito se encuentra contemplada en el artículo 317 del Código General del Proceso, vigente a partir del 1° de octubre de 2012, por mandato del numeral 4° del artículo 627 de la misma obra.

De acuerdo con el citado precepto, el desistimiento tácito es la consecuencia jurídica que ha de aplicarse, a modo de sanción, respecto de la parte que promovió un trámite, pero no cumplió con una carga procesal -de la cual depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado lapso (Numeral 1°, art. 317 C. G del Proceso), o cuando el proceso permanece inactivo, esto es, sin ninguna actuación, por el término de un (1) año en la Secretaría del Juzgado, antes de dictarse sentencia (Numeral 2°, *ibídem*), o una vez proferida ésta, o el auto ordenando seguir adelante con la ejecución de ser el caso, si dicha inactividad persiste por un período de dos (2) años (Literal b), numeral 2 del mismo Estatuto).

Dicha normativa establece los anteriores supuestos, pero con relación a cada uno impone ciertos mandatos para el Juzgado, al tiempo que consagra cómo la parte puede impedir la finalización del trámite. Ciertamente, en el primer motivo, la simple inactividad sin sentencia, la regla no contempla un tiempo específico para declarar el Desistimiento tácito, pero si establece que la forma de evitarlo es cumplir con la carga procesal pendiente, dentro de los treinta días siguientes al requerimiento efectuado por el Juzgado para ese efecto.

En cambio, en las restantes causas se dijo cuál era el tiempo de inactividad, pero la superación de ésta se amplió a cualquier actividad, de cualquier naturaleza, desde luego, que impulsara el proceso, y sin que mediara requerimiento alguno. En esta medida, la parálisis de un año, sin sentencia, o de dos años, con sentencia, obliga a verificar que la inactividad procesal sea total o, de haber actividad, ésta no conduzca a pasar el proceso de una etapa a otra.

Tal como viene de explicarse, el canon 317 del Código General del Proceso contempla tres presupuestos diferentes, para la procedencia de la terminación anormal del proceso por la figura de desistimiento tácito, atendiendo al estado en el que se encuentre el mismo. Ellos son, se reitera:

- **Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso se encuentra pendiente de una actuación o impulso del promotor de la actuación.** En este caso, la norma establece un procedimiento previo a la terminación del proceso, consistente en el requerimiento que debe hacer el Juzgado a dicha parte para que proceda a cumplir con la carga que le corresponde en un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la providencia que así lo disponga, so pena de declarar el desistimiento tácito.

- **Cuando no se ha dictado sentencia y el proceso permanece inactivo por un plazo de un año.** Para este evento, no exige la norma como presupuesto que el proceso se encuentre pendiente de una actuación de la parte actora, para continuar con la demanda, como si lo hace para el primero, simplemente que permanezca sin actuación de ninguna naturaleza, por ese período, pudiendo el Despacho proceder a la terminación del mismo por desistimiento tácito, sin requerimiento previo.

- **Cuando ya se ha dictado sentencia o auto que ordena seguir adelante con la ejecución y el proceso permanece inactivo por un período de dos años.** Al igual que el anterior, no se exige en este caso que el proceso se encuentre pendiente de alguna actuación de la parte, solo que no se genere ninguna actuación por ese lapso de tiempo, para declarar el desistimiento tácito.

En los dos últimos casos, el legislador no estableció como presupuesto o requisito que el proceso o actuación estuviese pendiente de una carga procesal o acto de la parte que la haya promovido, sino que solo hizo referencia a la inactividad del proceso, lo que permite colegir, que si bien legalmente no está la parte obligada a cumplir con alguna actuación, si es necesario que realice alguna, de la cual se pueda deducir su interés o atención el proceso, de tal manera que el Juez tenga certeza sobre su continua actividad, encaminada a lograr no sólo la obtención de una resolución del conflicto, sino además, la efectividad de la sentencia o el pago de la prestación insoluta.

Es precisamente por esta razón que la misma preceptiva contempla como una de las reglas que deben atenderse para la aplicación de la figura del desistimiento tácito, que *“cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*. Sobre este particular la Corte suprema de Justicia en sentencia STC11191-2020 del 9 de diciembre de 2020, Radicación no. 11001-22-01-000-2020-01444-01 definió:

“...la “actuación” que conforme al literal c) del artículo 317 del Código general del Proceso interrumpe los términos para que se decrete su terminación anticipada es aquella que lo conduzca a definir la controversia o a poner en marcha los procedimientos necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer”. Es decir, la actuación debe ser “apta y apropiada para impulsar el proceso hacia su finalidad”, por lo que simples solicitudes de copias o actuaciones sin propósitos serios de solución a la controversia no tienen este efecto al no poner en marcha el proceso...”

2.- Caso concreto. El togado que representa la demandante, frente a la decisión del juzgado de primer grado de declarar la terminación del proceso por desistimiento tácito, se queja con que no aparece requerimiento alguno en el expediente que le impusiera una carga procesal; por tanto, el problema jurídico se circunscribirá en determinar si el juzgado de primera instancia realizó el requerimiento previo a la parte demandante, de manera que procediera a cumplir con la carga que le corresponde, en un término de treinta (30) días.

Revisado el expediente digital allegado, se tiene que, el 19 de julio de 2022, el juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, emitió dos autos en el interior del presente proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual. En efecto, uno hace parte del cuaderno de medida cuaderno de medidas cautelares donde se tuvo por desistida la cautela deprecada, decisión que fue notificada por estados el 22 de julio de 2022; y, en el cuaderno principal, la *a quo* requirió a la parte demandante para que dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de su notificación, que fue por estados del 21 de julio de 2022, procediera a realizar la notificación personal a la parte demandada en los término de ley, so pena de terminación del proceso por desistimiento tácito.

Así, puede comprobarse por parte de la Sala que, no le asiste razón al recurrente cuando advierte que ningún requerimiento previo se le había realizado para ejecutar determinada actuación, en tanto, el proveído se encuentra debidamente emitido por el despacho judicial y fue debidamente notificado por estados, tal y como puede evidenciarse en el sistema de gestión judicial.

Bajo estas condiciones, cuando se le hizo el requerimiento a la parte actora, en los términos del artículo 317 del C. General del Proceso, para que procediera a notificarle a los demandados La Equidad Seguros O.C., David y Daniela Arboleda Naranjo, el auto del 25 de marzo de 2022, que admitió la demanda, dicha parte, debía efectuar la actuación que viene de señalarse.

Sin embargo, puede verificarse en el expediente digital que el vocero judicial que asiste los intereses de la demandante, ningún pronunciamiento o constancia de notificación allegó al respecto, o como mínimo, la remisión de las citaciones correspondientes conforme lo establece el artículo 291 ibídem. Como corolario, como la parte demandante no adelantó ninguna gestión para el surtimiento del trámite pendiente en el proceso, esto es, la notificación de los demandados, era procedente la terminación por desistimiento tácito como lo definió la *a quo*.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada por las razones aquí esgrimidas; sin condena en costas, teniendo en cuenta que no se causaron.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el cinco de septiembre de 2022, dentro del proceso VERBAL instaurado por Isabel Sorella Fernández Orrego en contra de La Equidad Seguros, David y Daniela Arboleda Naranjo.

Sin lugar a condena en costas, dada su no causación.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022